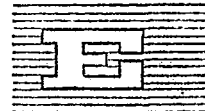


NACIONES UNIDAS
CONSEJO
ECONOMICO
Y SOCIAL



Distr.
GENERAL

E/CN.4/1983/SR.48/Add.1
13 de abril de 1983

ESPAÑOL
Original: INGLÉS

COMISION DE DERECHOS HUMANOS

39º período de sesiones

ACTA RESUMIDA DE LA 48ª SESION* (SEGUNDA PARTE)

celebrada en el Palacio de las Naciones, Ginebra,
el viernes 4 de marzo de 1983, a las 15.00 horas

<u>Presidente:</u>	Sr. BARAKAT	(Jordania)
más tarde,	Sr. OTUNNU	(Uganda)

SUMARIO

Cuestión de los derechos humanos en Chile (continuación)

Informe de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías
sobre su 35º período de sesiones (continuación)

* La primera parte del acta resumida de la sesión se publicó con la signatura
E/CN.4/1983/SR.48.

La presente acta podrá ser objeto de correcciones.

Las correcciones a la presente acta deberán redactarse en uno de los idiomas de trabajo. Dichas correcciones deberán presentarse en forma de memorando y, además, incorporarse en un ejemplar del acta. Las correcciones deberán enviarse, dentro del plazo de una semana a contar de la fecha del presente documento, a la Sección de Edición de los Documentos Oficiales, despacho E.6108, Palacio de las Naciones, Ginebra.

Las correcciones de las actas de las sesiones de este período de sesiones se reunirán en un documento único que se publicará poco después de concluido el período de sesiones.

CUESTION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CHILE (tema 5 del programa) (continuación)
(E/CN.4/1983/9; E/CN.4/1983/L.49/Rev.1; E/CN.4/1983/L.54; E/CN.4/1983/NGO/32;
E/CN.4/1983/NGO/35; E/CN.4/1983/NGO/36; A/37/564)

1. El Sr. O'DONOVAN (Irlanda) observa que, en opinión de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el estado de emergencia continúa vigente en Chile: los partidos políticos siguen estando prohibidos, no existe verdadera libertad de prensa, publicación o distribución, no hay libertad de asociación o reunión pacífica ni derecho de huelga. Aún se sigue expulsando a ciudadanos chilenos del país por medio de una simple decisión administrativa, los tribunales rechazan el procedimiento de habeas corpus, prosiguen las detenciones arbitrarias y la tortura, se ignora el paradero de muchas personas desaparecidas y no se ha tomado medida alguna para sancionar a los responsables de su desaparición.
2. El Relator Especial confirmó esta evaluación de la situación de los derechos humanos en Chile al afirmar que "ninguna variante se ha producido en el segundo semestre de 1982 que indique algún cambio favorable de la situación" (E/CN.4/1983/9, párr. 161). El Relator Especial ha observado un aumento en el número de informes sobre casos de tortura y señaló que ésta y los malos tratos tienen carácter institucional en Chile y cuentan con la indulgencia de las autoridades administrativas y judiciales. Al parecer, no se han producido nuevos casos de desapariciones, pero los 662 casos existentes permanecen sin resolver. Su delegación apela una vez más a las autoridades chilenas para que investiguen y aclaren la suerte corrida por las personas afectadas y tomen medidas para sancionar a los responsables de su desaparición.
3. Su delegación acoge con satisfacción el hecho de que durante el pasado año se permitió regresar al país a cientos de miles de personas que se habían exiliado de Chile. Insta a las autoridades chilenas a que permitan que todos los exiliados que deseen volver a Chile puedan retornar a su patria y, al mismo tiempo, pongan fin a la práctica de la relegación interna que se ha desarrollado en fecha más reciente.
4. La negativa de las autoridades chilenas a cooperar con el Relator Especial equivale a la negativa de colaborar con las Naciones Unidas. Esta actitud, que perjudica a la Organización, y especialmente a su labor humanitaria, es deplorable en sumo grado. Dado que continúa la situación grave de violaciones de los derechos humanos en Chile, su delegación piensa que es necesario prorrogar una vez más el mandato del Relator Especial e insta nuevamente a las autoridades chilenas a que cooperen con él.
5. El Sr. MALKO (República Socialista Soviética de Ucrania) dice que es el décimo año consecutivo en que se señala a la atención de la comunidad internacional la trágica situación de Chile resultante de la toma del poder por la Junta Militar con el apoyo de fuerzas imperialistas externas.
6. La Junta sigue ignorando descaradamente todas las solicitudes de los órganos de las Naciones Unidas y las numerosas resoluciones de la Asamblea General, del Consejo Económico y Social, de la Comisión de Derechos Humanos y demás organismos que condenan sus actividades delictivas. Los múltiples datos referentes a las violaciones notorias y masivas de los derechos humanos en Chile constituye una crónica

trágica del sufrimiento del pueblo chileno en condiciones creadas por la dictadura fascista, que ha privado a la población, y en particular a los trabajadores, de sus derechos y libertades más elementales. La tortura, el terror y la represión se han institucionalizado bajo la Junta, y las detenciones arbitrarias, las desapariciones y el exilio se han convertido en hechos frecuentes en Chile, país que se distinguía anteriormente por sus tradiciones democráticas.

7. La base formal del fortalecimiento de la represión en Chile reside en la nueva Constitución de 1980 y los decretos y leyes que concentran el poder en manos de las fuerzas armadas. Los intentos de convencer a la comunidad internacional de que la situación está mejorando contradicen los hechos. Los dirigentes del régimen han amenazado con tomar medidas rigurosas contra cualquier persona comprometida en actividades subversivas; han prohibido los partidos políticos por lo menos hasta fines de 1983; el estado de emergencia ha sido prorrogado una vez más por un período indefinido; miles de presos políticos recluidos en 180 campos de concentración son sometidos a torturas terribles; 2.500 personas han desaparecido sin dejar huella; se ejerce una censura de prensa rigurosa, y el 95% de las publicaciones literarias no llega a lectores chilenos.

8. Las afirmaciones hechas recientemente en el Congreso de los Estados Unidos en el sentido de que se ha progresado en la esfera de los derechos humanos en Chile son mera hipocresía. De acuerdo con el informe del Relator Especial (E/CN.4/1983/9), existe un aumento importante del número de personas sometidas a torturas físicas y psicológicas (párrs. 39 y 40). Hasta la fecha no se ha sancionado a ninguno de los responsables de estos crímenes.

9. El Relator Especial hace notar además (*ibid.*, párr. 170) que la situación relativa al ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales se aleja cada vez más de la norma internacional. Además, la nueva legislación hace la situación de los trabajadores aún más difícil. El "milagro" de un Chile floreciente prometido por la Junta tras el golpe de Estado sangriento no se ha cumplido. El modelo económico aplicado ha llevado al desastre económico en forma de una fuerte caída del volumen de la producción industrial, quiebras masivas y un alza de los precios y de la deuda externa catastrófica, que ha llegado a 16.000 millones de dólares. Al mismo tiempo, el nivel de vida de los trabajadores continúa bajando y el desempleo abunda.

10. La lucha contra la inflación ha conducido a la reducción de todos los programas sociales. Los monopolios norteamericanos se han apoderado de la economía chilena y han comprado la industria minera que constituía su principal apoyo. Las condiciones para estos tratos resultaron favorables desde el comienzo del año en que la Junta aprobó una ley sobre las actividades de las sociedades extranjeras. Según datos oficiales, el monto de las inversiones extranjeras en Chile asciende a más de 5.000 millones de dólares, el 80% del cual se atribuye a los Estados Unidos. Unas 300 sociedades norteamericanas comparten el despojo de los recursos del país. Las sanciones económicas establecidas por los Estados Unidos contra Chile en 1976 fueron pura ficción, los bancos norteamericanos siguen financiando a la Junta, los monopolios norteamericanos continúan invirtiendo en Chile y las armas norteamericanas siguen llegando al país.

11. La solidaridad internacional con el pueblo chileno y la acción de las organizaciones internacionales con la participación de las Naciones Unidas son vitales para la lucha contra el fascismo. La Comisión de Derechos Humanos, otros órganos de las Naciones Unidas y la comunidad mundial deben proseguir prestando atención a las

cuestiones de Chile hasta que cesen las violaciones de los derechos humanos en ese país, y la Comisión debe hacer todo lo que esté en su poder para alcanzar ese objetivo. Su delegación apoya la propuesta de prorrogar el mandato del Relator Especial. La situación de Chile es tal que la Comisión tiene la obligación de aprobar una resolución que prevea medidas mucho más decisivas respecto de las violaciones de los derechos humanos en Chile.

12. El Sr. JERKIC (Yugoslavia) dice que la información disponible demuestra que hasta derechos fundamentales como el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la seguridad y el derecho a la libertad de circulación, están sumamente comprometidos en Chile. Su delegación reitera su consternación ante los casos de tortura y detenciones arbitrarias efectuadas por personas no autorizadas. Ha resultado exacta la opinión de su delegación, manifestada ya el año anterior, en el sentido de que la nueva Constitución chilena, que incluye numerosas disposiciones discriminatorias, equivale a la institucionalización de las violaciones de los derechos humanos en Chile. La Constitución contempla la aplicación paralela de dos formas de ley marcial y confiere poderes excepcionales al Presidente de la República y prorroga su mandato hasta 1989.

13. Hay que aprovechar cada oportunidad para contribuir a la restauración del orden jurídico democrático tradicional en Chile, haciéndose eco de la preocupación de la comunidad internacional por las violaciones de los derechos humanos y libertades fundamentales en ese país. Su delegación apoya plenamente las conclusiones contenidas en el informe del Relator Especial (E/CN.4/1983/9) y considera que su mandato debe prorrogarse, para demostrar así que la comunidad internacional no ha desistido de sus peticiones de que cesen las violaciones de los derechos humanos en Chile y de que las autoridades chilenas cumplan con sus obligaciones en virtud de los instrumentos internacionales que han suscrito.

14. El Sr. KONSTANTINOV (Bulgaria) dice que la Junta de Gobierno de Chile sigue aplicando su política de violaciones masivas y notorias de los derechos humanos. El objetivo principal del golpe fascista contra el Gobierno legítimo de Allende fue eliminar la oportunidad de progreso social, detener el proceso natural de la evolución social, y crear y mantener las condiciones más favorables para el saqueo del pueblo chileno en beneficio de las grandes empresas nacionales y extranjeras. Diez años de terror y represión no han legitimado en grado alguno a la Junta. Las afirmaciones de que la situación en Chile ha comenzado a mejorar tienen como propósito conciliar la comunidad internacional con un hecho consumado que no se puede tolerar; los hechos y la información disponible sobre la situación en Chile demuestran que ésta ha empeorado todavía más.

15. Tal como lo ha destacado el Relator Especial, las violaciones del derecho a la vida forman parte integrante de la política de la Junta respecto del pueblo chileno. La tortura y los malos tratos tienen carácter institucional en el Estado chileno y son tolerados por las autoridades administrativas y judiciales, mientras que los órganos de seguridad disfrutan de impunidad.

16. El Relator Especial ha observado con pesar la total falta de mejora de la situación de los derechos humanos en Chile durante el año pasado. Ninguna de las recomendaciones hechas por la comunidad internacional ha sido oída, ni ha habido indicio alguno de medidas para restituir el goce de los derechos humanos, ya a nivel legislativo o judicial, ya a nivel ejecutivo.

17. Otras fuentes de información demuestran que un Estado autoritario, establecido por la fuerza, ha puesto las instituciones económicas, políticas y sociales en manos de personas que han permitido el saqueo de la riqueza nacional de Chile por empresas extranjeras como recompensa por su ayuda activa en el derrocamiento del Gobierno legítimo del pueblo chileno a expensas de miles de vidas humanas y años de brutal terror fascista. La Junta chilena trata ahora de legitimar el terror mediante la aplicación de leyes y la celebración de elecciones ridículas a fin de poder quejarse de que las Naciones Unidas han sido selectivas y discriminatorias en su tratamiento.

18. Ultimamente ha habido indicios en la Comisión de Derechos Humanos de que los defensores del régimen chileno intentan eludir el debate sobre la situación de los derechos humanos en Chile en relación con el tema correspondiente del programa con objeto de desviar la atención de la comunidad internacional de esta cuestión. Su delegación se opondrá a cualquier tentativa de esta índole por considerarla totalmente inaceptable, ya que el fin perseguido es el reconocimiento tácito de un estado de cosas incompatible con la preocupación de la Comisión por la situación alarmante de los derechos humanos en Chile.

19. Las pruebas disponibles demuestran que la Junta militar fascista de Chile es culpable de las más brutales, masivas y notorias violaciones de los derechos humanos. Por esta razón, su delegación apoyará la prórroga del mandato del Relator Especial.

20. El Sr. SELVA GUTIERREZ (Nicaragua) dice que su delegación comparte el sentir de la comunidad internacional en lo relativo a la situación de los derechos humanos en Chile y expresa su más profunda preocupación por el persistente deterioro de esa situación, reflejada en el informe del Relator Especial (E/CN.4/1983/9).

21. En dicho informe se pone de relieve la Constitución de 1980, la cual no refleja en absoluto la voluntad popular libremente expresada y cuyas disposiciones reprimen, suspenden o limitan el disfrute y el ejercicio de los derechos humanos. El derecho a la vida constituye un derecho fundamental para toda la comunidad internacional, pero este derecho, que es el más sagrado de todos los derechos es violado de forma persistente por el Gobierno chileno. A este respecto, el orador menciona en particular el homicidio del dirigente sindical Tucapel Jiménez y los 662 casos pendientes de personas desaparecidas. Asimismo, se refiere al aumento de la cantidad de denuncias de torturas, práctica que está **estrictamente** prohibida por diversos instrumentos internacionales.

22. Y no se puede pasar por alto la situación de los indígenas en Chile, que se sigue agravando. Informaciones recientes señalan que los decretos leyes Nos 2768 y 2750 son aplicados para despojar a la comunidad mapuche de sus tierras.

23. La delegación de Nicaragua solicita a la Comisión que renueve el mandato del Relator Especial y que continúe con el examen de la situación de los derechos humanos en Chile considerada como tema especial y cuestión prioritaria.

24. El Sr. IBARRA (Consejo Internacional de los Tratados Indios) dice que su organización, que representa a 98 naciones indias, ha presentado un documento (E/CN.4/1983/NGO/32) en el que se describe la grave situación de las poblaciones indígenas en Chile. El Decreto Ley Nº 2568 sobre la división de las tierras de los indios continúa aplicándose de manera abusiva y discriminatoria, hasta el extremo de que ahora

se profanan los lugares sagrados de los mapuches. Su organización considera que las acciones del Gobierno chileno violan el derecho de todos los pueblos a crear, mantener y conservar sus espacios religiosos y el derecho de los pueblos indios sobre sus territorios ancestrales.

25. La inquietud expresada el año anterior con relación a las poblaciones de los aymarás en el norte de Chile se ha visto confirmada por la presencia de empresas transnacionales de cobre que utilizan la poca agua disponible que pertenece a los aymarás. Estos indios viven en uno de los desiertos más áridos de la tierra y, por lo tanto, su vida y cultura están en peligro.

26. La documentación que la Comisión tiene ante sí demuestra que no ha habido ninguna mejora en la situación general de los derechos humanos en Chile, a la vez que los derechos políticos, sociales y culturales de las poblaciones indígenas, establecidas en múltiples instrumentos internacionales, son violados sistemáticamente. Su delegación solicita una vez más el respeto de los derechos de los indios de Chile, y en particular el derecho a poseer sus territorios ancestrales y su derecho a ser reconocidos en tanto pueblos específicos. Asimismo, solicita a la Comisión que renueve el mandato del Relator Especial.

27. El Sr. ARTUCIO (Comisión Internacional de Juristas), tras tomar nota de la conclusión del Relator Especial de que la situación de los derechos humanos en Chile no ha mejorado a lo largo del segundo semestre de 1982, dice que la negación de los derechos humanos en este país se encuentra facilitada por la nueva Constitución, que menoscaba seriamente los derechos civiles y políticos y limita los económicos, sociales y culturales. Desde septiembre de 1973, Chile vive bajo un estado de excepción que ha tenido diversos nombres. La necesidad del régimen de ofrecer una imagen política aceptable a la comunidad de naciones determinó la redacción de una nueva Constitución y su adopción en un plebiscito que no puede considerarse que haya sido la expresión libre y auténtica de la voluntad del pueblo chileno. La Constitución se divide en dos partes: disposiciones permanentes que no entrarán totalmente en vigor hasta 1999, y disposiciones transitorias que rigen durante un período llamado de "transición", que durará hasta 1989.

28. En el régimen de transición, las fuerzas armadas concentran la suma del poder del Estado: puesto que son ellas quienes ejercen el poder ejecutivo, no están sometidas a ninguna forma de control efectivo; las funciones legislativas están a cargo de la Junta Militar y del Jefe del Ejecutivo, que actúan asesorados por una junta legislativa con poderes meramente consultivos y no decisorios; y el poder judicial al cual se ha quitado parte de su competencia en beneficio de consejos de guerra. Este control sobre las instituciones alcanza igualmente al nivel regional, pues, por ejemplo, los alcaldes son nombrados por el Presidente de la República, y las universidades están dirigidas por rectores nombrados por el Presidente, que son en general oficiales de las fuerzas armadas.

29. Durante el período de transición, los chilenos no pueden ejercer derechos políticos; no pueden elegir ni ser elegidos, puesto que el Parlamento empezará a funcionar solamente en 1990. La nueva Constitución nombró al General Augusto Pinochet Presidente hasta 1989. Durante un estado de excepción, el Presidente puede suspender los derechos de reunión, asociación y expresión por decreto, detener a las personas sin orden judicial hasta por 20 días, expulsar a extranjeros y también a chilenos del territorio nacional, prohibir la entrada y salida del país a los nacionales o

relegar a cualquier persona a localidades del interior por el término de tres meses. Como se puede ver en el informe del Relator Especial, esas facultades excepcionales han sido usadas como arma de represión e intimidación contra opositores políticos y sindicales.

30. Durante el año pasado se cometieron violaciones del derecho a la vida y a la libertad y limitaciones a los derechos sindicales, todo ello en el marco de una profunda crisis económica y social, con un desempleo cercano al 25% y una baja salarial real del 13%.

31. Luego, el orador pone de relieve en particular el Decreto Ley N° 2568, que regula la tenencia de tierras de las comunidades indígenas y afecta de forma adversa sus derechos culturales esenciales.

32. Por todo ello, su delegación cree que la Comisión debe seguir manteniendo su vigilancia sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Chile, mientras subsistan las violaciones graves de estos derechos. Es necesario que en Chile se vuelva a respetar los derechos humanos y a cumplirse con las obligaciones emanadas de los instrumentos jurídicos internacionales destinados a proteger esos derechos.

33. La Sra. GAER (Liga Internacional de los Derechos del Hombre) se refiere a las violaciones del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, relativas al derecho de salir de cualquier país, incluso del propio, y de entrar en él, y del derecho a la libre circulación dentro del territorio nacional, derechos fundamentales que todas las naciones civilizadas deben garantizar a sus ciudadanos. En Chile, el Presidente tiene y ejerce la facultad de denegar el derecho a salir del país. Asimismo, tiene la autoridad jurídica para negar a los chilenos el regreso a su país, como ha quedado demostrado en el caso de Jaime Castillo, Presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Debido a esta política oficial, las personas de mayor talento del país se encuentran en el extranjero. En lo que concierne a la libertad de circulación dentro del país, el Gobierno chileno relega de forma arbitraria a personas en localidades del interior del país por períodos de hasta tres meses.

34. La Comisión encargada de examinar el problema del exilio establecida en Chile en noviembre de 1982 fue disuelta a fines de año. Se había establecido para que examinara y propusiera al Presidente de la República soluciones relativas a la situación de personas que tienen prohibida la entrada al país. Las expectativas habían aumentado y los miembros de la Comisión habían emprendido su tarea con seriedad, recomendando que se permitiese el retorno a Chile de aproximadamente 600 personas, incluyendo a algunos de los exiliados más eminentes. El Gobierno chileno, sin embargo, publicó una lista con sólo 125 nombres, entre los que no se hallaban los de ninguna de las importantes personalidades en exilio, sino que incluía nombres de personas fallecidas o que habían salido al extranjero cuando niños o sencillamente para trabajar o estudiar, y hasta de personas que nunca habían solicitado permiso para volver.

35. La Liga Internacional de los Derechos del Hombre ha sopesado la significación de este hecho conjuntamente con otros acontecimientos acaecidos en diciembre de 1982, incluida una manifestación multitudinaria en la cual se procedió a detener a sindicalistas y a golpear a letrados defensores de los derechos humanos.

36. En opinión de la Liga, la comisión encargada de estudiar el problema del exilio se estableció de forma fraudulenta para inducir a la comunidad internacional a creer que la situación de los derechos humanos en Chile estaba cambiando, cuando en realidad unas 37.000 personas son mantenidas en el extranjero por decreto. Ninguna nación, tampoco Chile, debe abusar del derecho a la libertad de circulación en esta forma.

37. El Sr. HANESEAN (Procedural Aspects of International Law Institute/International Human Rights Law Group) dice que, durante el debate del tema 12 del programa, su delegación discutió el caso de naciones en que el estado de sitio o emergencia se ha convertido en un rasgo permanente del derecho del país, con graves consecuencias para la protección de los derechos humanos. El Relator Especial sobre Chile ha aportado detalles claros sobre el doble estado de emergencia en ese país, que favorece las violaciones sistemáticas y notorias de los derechos humanos.

38. Una de las mayores prioridades de su organización es la aplicación de la ley norteamericana que restringe la ayuda militar y económica de los Estados Unidos a gobiernos que violan los derechos humanos. Con respecto a Chile, el Congreso norteamericano ha promulgado la Ley de Seguridad Internacional y Cooperación para el Desarrollo de 1981, que dispone que no se otorgará asistencia militar a Chile a menos que el Presidente de los Estados Unidos presente al Congreso un informe detallado que certifique que el Gobierno de Chile ha progresado de forma significativa en el cumplimiento de los principios de los derechos humanos reconocidos internacionalmente.

39. El informe del Relator Especial (E/CN.4/1983/9) es de importancia decisiva para organizaciones como la suya. En él se establece con certeza que el Gobierno de Chile no solamente falta a su deber de mejorar la situación del goce de los derechos humanos, sino que ha instituido mecanismos que aseguran su continua violación. Las consecuencias humanas de la tragedia chilena se extienden mucho más allá de las fronteras del país. Más de un millón de chilenos reside fuera del país y decenas de miles viven en el exilio político. Se había establecido una comisión nacional con el propósito de estudiar recomendaciones para el retorno de los exiliados, pero las esperanzas cifradas en ese órgano se vieron frustradas tras sólo dos meses.

40. Su delegación solicita la aprobación del proyecto de resolución E/CN.4/1983/L.49, en el que se elogia al Relator Especial por su informe y se renueva su mandato. La vigilancia continua por parte de la Comisión y del Relator Especial es indispensable para que el mundo conozca la verdadera situación de los derechos humanos en Chile.

41. La Sra. KSENTINI (Observadora de Argelia) dice que la nueva Constitución chilena ha concentrado el poder institucionalizado en manos de los militares, confiriéndoles una autoridad especial para desempeñar funciones administrativas, legislativas, judiciales y para aplicar la ley. La Asamblea General y la Comisión de Derechos Humanos ya han expresado su convicción de que esa Constitución, redactada sin participación popular, no garantiza la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, sino que, por el contrario, los limita. Las seudorreformas emprendidas por las autoridades chilenas sencillamente han trastocado el ordenamiento jurídico democrático tradicional y lo han sustituido por un estado de emergencia que burla los derechos humanos fundamentales.

42. La práctica de la tortura por parte de los servicios de seguridad, que disfrutaban de total impunidad, se ha hecho habitual; las detenciones masivas y arbitrarias afectan a miles de personas y la suerte corrida por individuos que han desaparecido

desde 1973 todavía no se aclara. Las persecuciones y actos de intimidación se dirigen en particular contra personas que defienden los derechos humanos, sindicalistas y miembros de asociaciones de parientes de los desaparecidos. Otro motivo de preocupación son las restricciones a la libertad de circulación impuestas a las personas tanto dentro como fuera del país.

43. Las autoridades chilenas optan por ignorar los llamamientos de la comunidad internacional y prosiguen con la militarización de su régimen en colaboración estrecha con Potencias extranjeras que aprovechan la situación para infiltrarse en América Latina. Las ambiciones de Israel en América Latina se hacen cada vez más evidentes, a la vez que se desarrollan vínculos entre las autoridades chilenas y el régimen racista de Sudáfrica.

44. En sus conclusiones, el Relator Especial ha afirmado que la situación de los derechos humanos en Chile no ha mejorado y que no se ha aplicado ninguna de las recomendaciones hechas por la comunidad internacional. La Comisión debe, por lo tanto, continuar prestando atención particular a esta situación dentro de un tema separado del programa con carácter prioritario y prorrogar el mandato del Relator Especial.

45. El Sr. NITSCHÉ (Observador de la República Democrática Alemana) dice que Chile ha sido gobernado durante más de nueve años por un grupo de oficiales militares que han elevado la denegación de los derechos humanos más elementales al nivel de política de Estado, pese a las numerosas resoluciones de las Naciones Unidas y las continuas protestas procedentes de todo el mundo. Es evidente, como se desprende de los últimos informes del Relator Especial, que la Junta de Gobierno persiste en su actitud de indiferencia ante las reivindicaciones de las fuerzas democráticas en Chile y la opinión pública mundial que las apoya. El estado de emergencia, que se prorroga indefinidamente, constituye la base formal para la aplicación del terror por el régimen, así como para sus prácticas arbitrarias.

46. En la documentación sobre la situación de Chile se consignan numerosos ejemplos de la práctica de la Junta de eliminar sencillamente a sus adversarios políticos. Esto confirma nuevamente la exactitud de la predicción hecha por el Relator Especial en 1981 de que la policía secreta chilena aumentaría su tendencia a utilizar escuadrones de la muerte. Los representantes de las instituciones humanitarias y de las organizaciones de socorro viven bajo las crecientes amenazas de bandas terroristas de derecha.

47. El Relator Especial ha señalado, además, nuevos hechos relativos a la desaparición de personas, que es el recurso predilecto de la Junta para eliminar a sus adversarios políticos. La suerte corrida por más 1.500 víctimas de esta práctica sigue siendo desconocida y los llamamientos hechos a las autoridades chilenas por la Comisión y la Asamblea General para que dé cuenta de las personas desaparecidas han sido poco menos que ignorados. Igualmente alarmantes son las estadísticas sobre las detenciones masivas efectuadas en 1982, que han aumentado en comparación con el año anterior. Los detenidos no disfrutaban de absolutamente ninguna salvaguardia jurídica, y las detenciones se llevan a cabo sin orden judicial.

48. Otro hecho que su delegación no puede pasar por alto es el apoyo exterior a los gobernantes militares chilenos, sin el cual el régimen fascista hace mucho tiempo que se hubiera desplomado. El orador desea, asimismo, mencionar la creciente cooperación de la Junta con el régimen de apartheid de Sudáfrica. Ambos gobiernos son respaldados por las mismas fuerzas y los mismos Estados.

49. No obstante, a pesar del régimen de terror y represión intensificados, en todos los estratos de la sociedad ha surgido una vasta oposición. La solidaridad mundial con el pueblo chileno en su lucha para restablecer los derechos democráticos es de una importancia extraordinaria.

50. Es de suma importancia que el régimen chileno proporcione de inmediato información relativa al paradero de 2.500 compatriotas que han sido deportados o han desaparecido, cese su política de detenciones masivas y libere a todas las personas presas por motivos políticos, acabe con la tortura por la policía secreta, restablezca todos los derechos y libertades sindicales y ponga término a su política de violación de los derechos económicos y sociales de los trabajadores.

51. La Asamblea General y la Comisión deben proseguir el estudio de la cuestión de los derechos humanos en Chile como asunto de máxima prioridad. El Gobierno de su país está dispuesto a apoyar a las Naciones Unidas en este empeño, ya que la práctica de la solidaridad con todos los pueblos que luchan por la realización de sus derechos inalienables constituye un principio básico de su política exterior.

52. La Sra. MOLTKE-LETH (Observadora de Dinamarca) dice que su Gobierno se ha adherido durante años a las manifestaciones de preocupación de la comunidad internacional por la situación de los derechos humanos en Chile. Las autoridades chilenas se han negado de forma persistente a cooperar con la Comisión de Derechos Humanos y su Relator Especial, alegando un trato selectivo y que las resoluciones de la Comisión distorsionan la situación de Chile. A juicio de su delegación, sin embargo, la atención que las Naciones Unidas prestan al problema es una expresión de solidaridad mundial con el pueblo chileno, y es necesario que haya una mejora en la situación de los derechos humanos en Chile para interrumpir el examen de este asunto.

53. Desgraciadamente, de parte chilena no se han tomado medidas que evidencien un cambio de postura. Hasta la fecha, a juicio de su delegación, no existe una situación de peligro excepcional en el país que justifique los estados de emergencia. Se sigue violando el derecho a la integridad física y moral, se han institucionalizado la tortura y los malos tratos, y no ha habido ningún progreso para aclarar la suerte de las personas desaparecidas.

54. Aunque se ha establecido una comisión asesora especial para estudiar el posible regreso de los exiliados, el número total de personas que viven en exilio hace imposible, en la etapa actual, interpretar este paso como indicio de una política más liberal.

55. En vista de que siguen llegando informes sobre violaciones de los derechos humanos en Chile, la comunidad internacional de proseguir el estudio de este asunto, y su delegación recomienda que se prorrogue el mandato del Relator Especial por un año más.

56. El Sr. THUONG (Observador de Viet Nam) dice que en Chile casi todos los derechos humanos han sido conculcados, desde los más elementales, como el derecho a la existencia, a la seguridad e intimidad, hasta el derecho de circulación, pensamiento y expresión, así como los derechos económicos, sociales y culturales. Además, amplios sectores de la población son víctimas de violaciones; 1,2 millones de personas se han exiliado durante los últimos nueve años, y a la vez millones de otras personas viven dentro del país en un clima de inseguridad y terror permanente sin esperanzas para el futuro. Los documentos A/37/564 y E/CN.4/1983/9 pueden complementarse con una información abundante de las organizaciones no gubernamentales y otras fuentes que corroboran la evaluación del Relator Especial sobre violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos y un régimen de terrorismo de Estado.

57. Un rasgo que llama la atención es el creciente refinamiento de los procesos represivos aplicados. El orador se refiere a las torturas llevadas a cabo en lugares secretos por personal especializado, el envenenamiento de los reclusos, la prohibición de regresar a Chile que afecta a decenas de miles de chilenos, la intimidación y persecución activas, la privación arbitraria de los derechos económicos y sociales y la explotación despiadada del trabajo de los niños.

58. La opinión pública internacional debe recordar en qué condiciones y con el apoyo de qué fuerzas la Junta fascista llegó al poder en 1973. Es inevitable hacer comparaciones con las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos bajo los regímenes más tiránicos de los últimos decenios en Viet Nam del sur, en Irán bajo el régimen del Sha, en Israel y en Sudáfrica. Estos regímenes han recurrido a las mismas prácticas de denegación de los derechos humanos, empleando las mismas psicologías, métodos y técnicas. No es posible condenar las graves violaciones de los derechos humanos que comete la Junta fascista en Chile sin condenar también a quienes instigaron al golpe de Estado antidemocrático de 1973. Occidente debe cesar de prestar su apoyo a este régimen.

59. El Gobierno y el pueblo de Viet Nam veneran la memoria del Presidente Allende como un ejemplo de dedicación a la causa de los derechos humanos. Continuará apoyando firmemente la valiente lucha del pueblo de Chile y el restablecimiento de los derechos humanos en ese país.

60. No se ha registrado mejora alguna en la situación de los derechos humanos, que incluso podrían burlarse con mayor cinismo y brutalidad en Chile en el futuro. El argumento de que se debe dejar al régimen chileno emprender reformas democráticas no es más que propaganda para engañar a la opinión pública. De ahí que sean indispensables el apoyo y la solidaridad de la comunidad internacional.

61. Su delegación hace suyo el proyecto de resolución E/CN.4/1983/L.49 y se opone a cualquier tentativa de archivar esta cuestión, lo cual contribuiría de forma peligrosa a alentar al régimen fascista de Chile, así como al resurgimiento de los movimientos neofascistas en muchos países, y perjudicaría seriamente la causa de los derechos humanos en el mundo.

62. La Sra. SLÁMOVÁ (Observadora de Checoslovaquia) dice que continúan las notorias violaciones de los derechos humanos en Chile sin que se observe ninguna mejora. Es bien sabido que el régimen chileno está intentando realzar su imagen mediante expedientes tales como la formación de una comisión de estudio de la situación de los exiliados, cuya composición demuestra su verdadero objetivo. Es evidente que al Gobierno chileno no le interesa verdaderamente garantizar la defensa de los derechos humanos. A decenas de miles de chilenos se les niega el derecho a vivir libremente y sin discriminaciones conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos.

63. En vista del deterioro continuo de la situación de Chile, su delegación insta a la Comisión a que siga prestando atención a esta cuestión y apoye la prórroga del mandato del Relator Especial.

64. El Sr. Otunnu (Uganda) ocupa la Presidencia.

65. El Sr. CHILOVITCH (Observador de la República Socialista Soviética de Bielorrusia) dice que la trágica situación del pueblo chileno es motivo de gran alarma entre la humanidad progresista. Diversos órganos internacionales han adoptado resoluciones que condenan las continuas violaciones masivas y notorias de los derechos humanos en Chile. En esas resoluciones se manifiesta la alarma general respecto del terror y la represión que prevalecen en todas las esferas de la vida política y económica de ese país y se exhorta a las autoridades chilenas a restablecer los derechos humanos fundamentales y a liberar a las personas presas por motivos políticos.

66. La nueva Constitución no ha contribuido a mejorar la situación, sino que viola los derechos humanos y libertades fundamentales, mientras que presuntas "amenazas a la paz interior" sirven para justificar nuevas actividades represivas. Se han institucionalizado las violaciones del derecho a la vida, a la libertad, a la integridad física y moral y a la seguridad personal y se ha registrado un aumento en las detenciones arbitrarias, la práctica de la tortura y el asesinato de los adversarios del régimen por organizaciones oficiales de seguridad protegidas por las autoridades, que los Estados Unidos, a su vez, protegen en su vasta represión. Por otra parte, se han pasado por alto los llamamientos de la comunidad internacional a las autoridades chilenas para que investiguen la suerte de las personas desaparecidas y castiguen a los funcionarios responsables. Continúan las violaciones de los derechos sociales y económicos más importantes con el consiguiente empobrecimiento de las grandes masas de trabajadores. Las autoridades han llevado a la economía a un callejón sin salida; la producción industrial ha disminuido, las quiebras son frecuentes, las alzas de precios y de la deuda externa son desastrosas, hay una caída constante del nivel de vida de los trabajadores y un incremento del desempleo. Cada medida adoptada en el sector de la economía ha conducido al mayor empobrecimiento del pueblo y al enriquecimiento de las empresas multinacionales y de las camarillas financieras nacionales.

67. Es necesario prestar constante atención a las violaciones de los derechos humanos en Chile y tomar todas las medidas posibles para conseguir que las autoridades chilenas abandonen su conducta censurable. El orador condena el régimen y todos los que lo apoyan y pide que se ponga inmediatamente fin a las violaciones de los derechos humanos en ese país.

68. El Sr. SZELEI (Observador de Hungría) dice que las trágicas circunstancias de la vida del pueblo chileno bajo la brutal represión de la Junta exigen un esfuerzo concentrado por parte de la Comisión de Derechos Humanos. Su Gobierno deplora el terror institucionalizado y la opresión social ejercidos por la Junta Militar, que se reflejan en el valioso informe del Relator Especial (E/CN.4/1983/9). A juicio de su delegación, la Comisión debe concentrar y renovar sus esfuerzos a fin de encontrar medidas eficaces para poner fin a las violaciones de los derechos humanos en Chile.

69. Su delegación considera que no se respeta ni un solo derecho humano fundamental del pueblo de Chile. Las violaciones del derecho a la vida, la libertad y la integridad física y moral se han convertido en las características permanentes de la situación allí reinante, y todos los miembros de la Comisión tienen el deber de efectuar todos los esfuerzos necesarios para acabar con este trágico estado de cosas. La opresión en Chile coincide evidentemente con el incremento significativo de la asistencia financiera y económica de círculos foráneos, que tienden a pasar por alto las graves violaciones de los derechos humanos cuando se encuentran en juego sus propios intereses políticos o estratégicos. Su delegación está convencida de que ese tipo de asistencia contribuirá a prolongar la situación en Chile.

70. Su delegación apoya la prórroga del mandato del Relator Especial como prueba de su decisión de poner término a la vergonzosa situación de los derechos humanos en Chile.

71. El Sr. ZAWALONKA (Polonia) dice que el informe más reciente del Relator Especial (E/CN.4/1983/9) y sus reseñas anteriores sobre la situación de los derechos humanos en Chile forman un conjunto meticulosamente compilado y cuidadosamente sistematizado de testimonios sobre violaciones masivas y notorias de los derechos humanos. El informe constituye una grave crítica de las políticas y prácticas del régimen chileno ilegal y una prueba de su tenaz quebrantamiento de los derechos humanos. El desbaratamiento del orden jurídico democrático tradicional se ha visto consolidado por la introducción de una legislación regresiva, incompatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Chile. La nueva Constitución permite la injerencia en los derechos humanos y las libertades fundamentales. No sólo se ha infringido el procedimiento de aplicación del artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, relativo a situaciones excepcionales, sino también las disposiciones relativas a derechos y libertades inalienables.

72. Los últimos acontecimientos acaecidos en Chile confirman la gravedad de las restricciones y violaciones de los derechos humanos en ese país. Los abusos cometidos tienen carácter institucional y cuentan con la tolerancia de las autoridades administrativas y judiciales. El hecho de que el régimen chileno persiste con arrogancia en su implacable e inhumana política de hostigamiento y persecución del pueblo, no se puede explicar por la depravación de los miembros de la Junta, pues se trata de una acción mancomunada de los perversos intereses locales y los intereses de una Potencia externa protectora que condicionan la situación actual de Chile. A ese factor se debe la involución del proceso democrático y de las reformas socialistas iniciadas por el Presidente Allende. También obedece a él la denegación al pueblo chileno de su derecho a la libre determinación y la libertad de elegir su propio destino político.

73. El influjo nocivo de la política del régimen no acaba en las fronteras de Chile, sino que está originando tensiones a escala internacional, en particular desde el establecimiento de contactos regulares entre Chile y Sudáfrica, basados en el tráfico de armamentos y el intercambio de personal militar y de tecnología avanzada e información.

74. Su delegación sigue apoyando todos los esfuerzos encaminados a poner fin a las violaciones masivas y notorias de los derechos humanos en Chile, y hace suya la resolución 37/183 de la Asamblea General. Es de la opinión de que se pongan a disposición del Relator Especial todos los medios necesarios para la reanudación de su importante tarea.

75. El Sr. LAURIJSEN (Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres) dice que su organización está bien situada para confirmar que, con relación a los derechos sindicales, Chile ha institucionalizado la represión y la denegación total de los derechos y libertades fundamentales. Si bien es cierto que los asesinatos y derramamientos de sangre por parte del régimen militar han disminuido paulatinamente, los años de terror e intimidación han hecho estragos, particularmente en las filas del movimiento sindical democrático.

76. La presente situación de Chile se caracteriza por una crisis aguda originada por la imposición de un sistema económico malogrado que no tiene posibilidad alguna de mantenerse a largo plazo y que ha conducido al aumento del desempleo y la inflación, el cierre y quiebras de empresas, la escasez de las inversiones extranjeras y la denegación de los derechos individuales y sociales, a la vez que la situación empeora por las campañas de terror que causan un resentimiento y desesperación crecientes entre la población. Sin embargo, la acción sindical organizada y la oposición se han fortalecido.

77. Las organizaciones sindicales que han manifestado sus opiniones han sido víctimas de una violenta represión y sus dirigentes han sido encarcelados o expulsados del país. Enfrentadas a la resuelta oposición de los sindicatos, las autoridades chilenas han recurrido al asesinato.

78. En diciembre de 1982, la policía intervino de forma brutal durante una manifestación de trabajadores celebrada en Santiago para denunciar el desastroso deterioro de la situación ocupacional y el nivel de vida en el país. Varios participantes resultaron heridos y se detuvo a 50 sindicalistas. Uno de ellos, Manuel Bustos, Presidente de la Coordinadora Nacional Sindical (CNS), fue expulsado del país, y una vez en Europa hizo una reseña de testigo presencial sobre el estado de la economía chilena y la represión cada vez mayor de un régimen abocado a la bancarrota.

79. Las autoridades aplican otros métodos de intimidación y hostigamiento para impedir que el movimiento obrero defienda sus legítimos derechos. Por ejemplo, el dirigente sindical Sr. Mery Toro fue detenido y amenazado por agentes de la CNI cuando se dirigía a una reunión y en noviembre de 1982 la policía irrumpió en los locales de la CNS. Durante los últimos meses, las autoridades han rechazado solicitudes legales para celebrar reuniones sindicales legítimas, denegando de esta forma varias libertades civiles y el derecho a la libertad de circulación.

80. Ante esta situación intolerable de violaciones brutales y abiertas de los derechos humanos en Chile, su organización ha invitado a la Comisión de Derechos Humanos y otras organizaciones a que asistan a una conferencia mundial sobre derechos humanos y sindicales en Chile que se organizará en marzo de 1983, a fin de dar nuevo ímpetu y orientación al movimiento sindical democrático en su lucha contra la dictadura fascista en Chile.

81. Sigue siendo deber de la comunidad internacional hacer todo lo posible para apoyar al pueblo chileno en sus aspiraciones y empeños pacíficos para poner término a este capítulo negativo de su historia. Su delegación confía en que la Comisión decidirá prorrogar el mandato del Relator Especial.

82. El Sr. NCHAMA (Movimiento Internacional para la Unión Fraternal entre las Razas y los Pueblos) dice que el Relator Especial sobre Chile ha consignado de forma elocuente la agudización de los métodos que violan los derechos y las libertades expresamente estipulados en los instrumentos internacionales que presiden los trabajos de la Comisión de Derechos Humanos. En los últimos meses han seguido creciendo los movimientos del pueblo para reclamar sus derechos y libertades, y el régimen ha respondido intensificando sus métodos represivos. La propia prensa chilena ha informado sobre cómo la policía utilizó perros amaestrados, lanzándolos contra los manifestantes en agosto y diciembre de 1982, mientras que la policía secreta se infiltraba entre los manifestantes, uniéndose a la policía en sus ataques contra la gente. Estos hechos dieron origen a una nueva muestra de valor de los chilenos cuando el Colegio de Periodistas de Chile entabló una querrela judicial contra el Ministro del Interior.

83. El régimen chileno recurre cada vez más a las violaciones de los derechos humanos para defender su propia existencia ante los esfuerzos encomiables del pueblo chileno, de sus organizaciones sociales y políticas y de la Iglesia Católica para restablecer las instituciones democráticas y las garantías constitucionales de que antes disfrutaban.

84. Su delegación considera que deben mantenerse las medidas y mecanismos acordados por la Comisión de Derechos Humanos y que el mandato del Relator Especial debe prorrogarse para conseguir la liberación del pueblo de Chile por medio de la información y la acción. Su organización observa con gratitud que la Comisión no ha vacilado en condenar el régimen chileno cuando éste parecía ser fuerte. Y ahora que los antecedentes indican que el régimen está cada vez más aislado de la sociedad civil y que su poder ya no parece tan inexpugnable, no hay más motivo para que la comunidad internacional cambie de actitud.

85. Uno de los peores aspectos de la situación es que Chile se está convirtiendo en un ejemplo para otros países totalitarios. La Constitución de cierto país africano es una copia fiel de la nueva Constitución chilena. La Comisión tiene el deber de condenar tales ideologías totalitarias y fascistas, que son contrarias a la libre determinación de los pueblos.

86. La Sra. DUMBAR (Organización de Solidaridad de los Pueblos de Africa y de Asia) dice que desde que su organización trabaja por la solidaridad con los pueblos de Africa y de Asia, que luchan por la independencia nacional, la democracia y el progreso económico y social, se interesa por los acontecimientos de América Latina y, particularmente, de Chile, país sumamente importante por su desarrollo republicano y avanzada experiencia política hasta 1973.

87. En un momento en que surge una oposición de base amplia contra la dictadura chilena, la comunidad internacional no puede vacilar en su apoyo a la lucha de los demócratas chilenos y debe condenar los métodos empleados para suprimir los derechos y libertades del pueblo chileno. Las consecuencias de lo ocurrido en Chile desde 1973 son desastrosas, e innumerables las violaciones de los derechos humanos y es aguda la crisis económica y social. Su organización ofrece su solidaridad permanente con el pueblo de Chile.

88. El Sr. ZAHIRNIA (Observador del Irán) dice que el tema 5 del programa "Cuestión de los derechos humanos en Chile" es engañoso, puesto que induce al pueblo a olvidar la gran responsabilidad de los Estados Unidos en Chile y en otros lugares. El Relator Especial debe examinar las causas profundas de esta situación. La causa principal es la intervención de los Estados Unidos mediante manejos y la organización del golpe de Estado de 1973. La segunda causa es que el tipo de régimen existente en Chile cuenta con el apoyo financiero y militar de la mayoría de los países occidentales. La tercera causa consiste en el hecho de que todos los protegidos de Estados Unidos en el mundo tienen asegurado un lugar de refugio, como fue el caso del Sha de Irán, Somoza y otros.

89. La mayoría de los oradores que lo han precedido han hecho referencia a la cuestión de las desapariciones. Es este un crimen contra la humanidad y su delegación no comprende cómo se ha pasado por alto la propuesta de adoptar una resolución sobre este asunto. Para el caso de los más de 9.500 iraníes desaparecidos existen varias resoluciones.

90. Muchas declaraciones se han concentrado en la cuestión de la expulsión y el exilio. En Chile las personas son expulsadas, al parecer, después de una audiencia, confiriéndose así una forma jurídica a un acto de Estado ilegítimo.

91. El Sr. HEREDIA (Cuba) dice que ninguna de las recomendaciones de la comunidad internacional con relación a Chile ha tenido como resultado la adopción de medidas encaminadas a restablecer los derechos humanos. El cuadro persistente de violaciones es una consecuencia de la represión ejercida por la dictadura fascista de ese país, con el apoyo de los Estados Unidos. Reina un clima de persecución e intimidación que afecta tanto a los chilenos como a la población indígena.

92. En el informe del Relator Especial (E/CN.4/1983/9) se consignan una enorme cantidad de antecedentes sobre la represión de la lucha colectiva del pueblo chileno por sus derechos y libertades. Los métodos de terror incluyen recientes redadas de la policía en diversas poblaciones de Santiago, llamadas operativas de carácter preventivo.

93. El Relator Especial ha demostrado igualmente cómo se conculcan de forma sistemática los derechos sociales, económicos y culturales. La salud pública y la educación han sido privatizadas, las comidas escolares reducidas y la matrícula universitaria limitada drásticamente.

94. La violación de los derechos humanos en Chile está vinculada a una política de endeudamiento económico; el país y su riqueza han sido entregados a una Potencia extranjera y su futuro económico ha sido hipotecado. Casi diez años de violaciones, detenciones, torturas, asesinatos y expulsiones han servido para enriquecer a grupos minoritarios y al capital imperialista, especialmente a los Estados Unidos. El pueblo chileno ha perdido mucho, al tiempo que una minoría ha obtenido ganancias cuantiosas.

95. Dado que Chile se ha alejado siempre más de las normas sociales aceptables bajo la política feroz de la dictadura, es necesario prorrogar el mandato del Relator Especial para que continúe el estudio de las violaciones humanas en Chile.

96. Finalmente, el orador expresa la esperanza de que esta cuestión deje pronto de ser una preocupación de la Comisión de Derechos Humanos gracias a los esfuerzos del pueblo chileno y a la solidaridad internacional.

97. El Sr. GASMI (Jamahiriya Árabe Libia) dice que el Relator Especial sobre Chile ha demostrado que es cada vez mayor el número de casos de encarcelamiento ilegal y de desapariciones en ese país, y que las libertades han sido suprimidas y que se recurre a la tortura.

98. Su delegación considera que esta situación no se habría producido si la Junta no hubiese contado con el apoyo de algunos países a quienes interesa mantener regímenes fascistas, en particular los Estados Unidos, Sudáfrica e Israel.

99. Su delegación apela al régimen chileno para que respete el derecho a la vida, aplique los principios de la legalidad y permita al pueblo el ejercicio de sus derechos conforme a los instrumentos internacionales suscritos por el Gobierno chileno, e insta a los países que ayuden a este régimen a que no lo sigan haciendo.

100. Su delegación hace suyo el proyecto de resolución E/CN.4/1983/L.49, pero considera que es incompleto porque no menciona los regímenes que continúan apoyando a Chile.

INFORME DE LA SUBCOMISION DE PREVENCIÓN DE DISCRIMINACIONES Y PROTECCIÓN A LAS MINORIAS SOBRE SU 35º PERIODO DE SESIONES (tema 20 del programa) (continuación) (E/CN.4/1983/L.34, L.35/Rev.1, L.36, L.42, L.43/Rev.1, L.46, L.47, L.57, L.64, L.67; E/CN.4/1983/4, capítulo I-A, proyecto de resolución I; proyecto de resolución III; proyecto de resolución VI; proyecto de resolución X)

Proyecto de resolución E/CN.4/1983/L.34

101. El Vizconde COLVILLE de CULROSS (Reino Unido), al presentar el proyecto de resolución E/CN.4/1983/L.34, dice que el debate sobre el tema 20 ha sido animado y constructivo. Ha habido acuerdo sobre el carácter independiente y especializado de la Subcomisión y sobre la conveniencia de mantener este carácter, para que la Subcomisión pueda así aportar una contribución insustituible en su esfera.

102. Como los miembros de la Subcomisión son elegidos a título personal, en teoría no debe preverse su sustitución por suplentes, de la misma forma que no está prevista la sustitución de los expertos en otros organismos de derechos humanos. Sin embargo, su delegación reconoce que hay argumentos en favor de un sistema de suplentes para aquellos casos en que los miembros de la Subcomisión se ven imposibilitados de asistir a una reunión por causa de enfermedad u otra razón. La identidad y calificaciones de los suplentes son tan importantes y pertinentes como las de los propios miembros elegidos; los suplentes deben poseer unas cualidades semejantes de independencia y experiencia. El electorado, es decir la Comisión de Derechos Humanos, debería tener la oportunidad de ponderar estos factores.

103. El proyecto de resolución E/CN.4/1983/L.34 está destinado a satisfacer estas preocupaciones. Sus patrocinadores entienden que si el Consejo Económico y Social aprueba el proyecto de resolución recomendado, el sistema propuesto entraría en vigor en las próximas elecciones, que han de celebrarse en el período de sesiones de 1984 de la Comisión. Habría que establecer las reglas con tiempo para entonces. El orador manifiesta que este sistema no limitaría en modo alguno el derecho de un miembro de la Subcomisión y de su Gobierno a nombrar a quienquiera que deseen como suplente o a cambiar los suplentes mediante un proceso de nombramiento y de elección complementaria en la Comisión, en el caso de que el primer elegido no pueda ocupar el cargo.

104. El único propósito del proyecto de resolución es promover la independencia y el carácter especializado de la Subcomisión. Cree que el texto es aceptable para todos y espera que la Comisión pueda aprobarlo sin votación.

105. El Sr. PACE (Secretario de la Comisión) dice que la palabra "alternative" de la versión inglesa de los apartados a) y c) del proyecto de resolución recomendado al Consejo Económico y Social para su aprobación, debe sustituirse por "alternate". La Secretaría también propone modificar la versión francesa del apartado c) adaptándola al original inglés.

106. El Sr. SOFINSKY (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que, con espíritu de buena voluntad y con el propósito de lograr una solución mutuamente aceptable, su delegación está dispuesta a aceptar la idea principal del proyecto de resolución E/CN.4/1983/L.34. Sin embargo, el proyecto de resolución adolece en su texto actual, de una serie de elementos negativos. En particular, el apartado c) del proyecto de decisión propuesto se aparta del artículo 13.2 del reglamento de las comisiones orgánicas del Consejo Económico y Social, no habiendo motivo para

poner a la Subcomisión en una situación excepcional frente a otros órganos semejantes. De acuerdo con este reglamento, no son los Estados sino los miembros de la Subcomisión quienes nombran a los suplentes, lo que constituye un procedimiento más imparcial y democrático. El orador presenta varios ejemplos en que los miembros han nombrado a sus propios suplentes, que han realizado destacadas contribuciones a la labor de la Subcomisión.

107. La intención de la enmienda propuesta por su delegación en el documento E/CN.4/1983/L.67 es conciliar el proyecto de resolución E/CN.4/1983/L.34 con el reglamento vigente. En su opinión basta con recomendar a los miembros de la Subcomisión y a sus respectivos gobiernos que se abstengan de designar suplentes no elegidos para garantizar que no se produzca abuso en el derecho de nombrar suplentes.

108. En el caso de que se proceda a votar el proyecto de resolución en su forma actual, su delegación se verá obligada a votar en contra. Con todo se trata de un proyecto importante y sus patrocinadores deben esforzarse por llegar a un consenso.

109. El Sr. CHOWDHURY (Bangladesh) dice que el propósito del proyecto de resolución E/CN.4/1983/L.34 es garantizar que, en ausencia de un miembro de la Subcomisión, su suplente sea una persona elegida por la Comisión y, por tanto, aceptable para ella. Una dificultad práctica es que el suplente designado sólo puede asistir si un miembro se ve imposibilitado de hacerlo; un país en desarrollo acaso no pueda pagar los gastos de tal persona. Otro problema es que aunque se eligen cinco o seis miembros de cada región geográfica, el proyecto de resolución establece que el suplente ha de ser del mismo país que el miembro.

110. A menos que se enmiende la resolución para tener en cuenta estas objeciones, no podrá apoyarlo. Tal vez convenga formar un grupo de trabajo, dirigido por el Vizconde Colville, para redactar las normas sobre los suplentes y transmitir las al Consejo Económico y Social para su aprobación.

111. El Sr. HEREDIA (Cuba) se pregunta si la propuesta que figura en el proyecto de resolución E/CN.4/1983/L.34 es de carácter permanente y si no está en contradicción con el reglamento de las comisiones orgánicas del Consejo Económico y Social. Sugiere que se recabe asesoramiento sobre la cuestión y que no se tome al respecto ninguna decisión apresurada.

112. El Sr. CALERO RODRIGUES (Brasil) dice que la cuestión de los suplentes de los miembros de la Subcomisión ha ocupado a la Comisión durante varios períodos de sesiones y que sería deseable tomar una decisión sobre el particular. La propuesta incluida en el proyecto de resolución E/CN.4/1983/L.34 responde a la necesidad de aclarar este problema. No está seguro de que el artículo 13.2 del reglamento de las comisiones orgánicas del Consejo se aplique en el caso de la Subcomisión, pues se refiere a órganos subsidiarios cuyos miembros son expertos nombrados por los gobiernos y que ocupan sus cargos a título personal. En este caso los miembros son elegidos por la Comisión de Derechos Humanos y todos los que participan en la Subcomisión deben ser elegidos así.

113. Lo que pretende el proyecto de resolución no es resolver la forma de reemplazar a los miembros temporalmente ausentes, pues la Subcomisión puede funcionar con algunos pocos miembros ausentes. El problema es que algunos miembros no pueden comprometerse a asistir durante todo el período de sesiones, en cuyo caso se nombran

suplentes en virtud del artículo 13.2. El orador no cree que este sea un buen procedimiento. Si se decide elegir a un miembro y a un suplente simultáneamente, la posibilidad de que ambos estén ausentes al mismo tiempo sería remota y el problema quedaría resuelto.

114. La enmienda contenida en el documento E/CN.4/1983/L.67 contradice la intención del proyecto de resolución, que exige que los suplentes de la Subcomisión sean elegidos y no nombrados por los miembros o gobiernos. Su delegación votará a favor del proyecto de resolución y en contra de la enmienda soviética.

115. El Sr. KONSTANTINOV (Bulgaria) dice que suscribe las observaciones del representante de Bangladesh. No puede admitir las discrepancias entre el artículo 13.2 del reglamento y las propuestas que contiene el proyecto de resolución E/CN.4/1983/L.34. La única forma de conciliarlas es con la enmienda presentada en el documento E/CN.4/1983/L.67.

116. Hace un llamamiento al representante del Reino Unido para que encuentre la forma de incorporar esa enmienda en el proyecto de resolución, lo que facilitaría su aprobación por muchas delegaciones.

117. El Vizconde COLVILLE de CULROSS (Reino Unido) dice, en respuesta a los representantes de Cuba y de Bangladesh, que se han pronunciado en favor de un mayor estudio de ciertos detalles del proyecto de resolución E/CN.4/1983/L.34, que desea subrayar que la Comisión se limita a formular una recomendación al Consejo Económico y Social; sugiere que no se aplase esta decisión. Lo que se necesita es una idea constructiva y positiva que pueda seguir el Consejo Económico y Social.

118. Si bien los patrocinadores del proyecto de resolución desean obtener el apoyo del máximo número de delegaciones de la Comisión, les es difícil aceptar la enmienda soviética del documento E/CN.4/1983/L.67, pues su aprobación significaría que los gobiernos pueden seguir nombrando a quienes deseen para ocupar el cargo de suplentes en la Subcomisión, sin ningún tipo de elección.

119. Por lo que se refiere al artículo 13.2 del reglamento, observa que éste no es intangible. En cualquier caso, los patrocinadores no proponen una enmienda global del reglamento sino una pequeña excepción. La solución propuesta parece, si no perfecta por lo menos viable y espera que la Comisión la respaldará, recomendando si acaso dedicar mayor tiempo a la cuestión.

120. El Sr. HEREDIA (Cuba) solicita a los patrocinadores que expliquen por qué, si no hay contradicción entre el proyecto de resolución y el artículo 13.2 del reglamento de las comisiones orgánicas del Consejo Económico y Social, es necesario utilizar las palabras "no obstante". Sólo el Consejo puede enmendar su reglamento. En su opinión hay que estudiar más la cuestión.

121. El Sr. SOFINSKY (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el debate ha confirmado sus temores de que algunos miembros de la Comisión desean cambiar las normas vigentes. Estas normas han sido adecuadas durante 34 años, pero sólo ahora se sugiere que son inadecuadas. El debate muestra que la cuestión no está madura para una solución. No se ha dedicado la plena y cuidadosa consideración necesaria a todos los aspectos para elevar una propuesta al Consejo Económico y Social.

122. El Sr. KONSTANTINOV (Bulgaria) dice que el empleo de la frase "decide que, no obstante" en el proyecto de decisión dirigido al Consejo Económico y Social implica que la Comisión prácticamente ya ha enmendado el reglamento. El proyecto de resolución contradice, en su tenor actual, este reglamento.

123. El Sr. GONZALEZ DE LEON (México) dice que en virtud de los artículos 22 y 24 del reglamento la Comisión Orgánica determina las funciones, composición y procedimientos de trabajo de su Subcomisión. La Comisión, por tanto, está facultada para formular las normas que regulan la cuestión de los suplentes en la Subcomisión. La Subcomisión ha venido trabajando como si su intención fuera constituir delegaciones, en lugar de escoger individuos sobre la base de su curriculum vitae y méritos personales.

124. Su delegación está dispuesta a aceptar la enmienda del documento E/CN.4/1983/L.67 si se suprimen las palabras "en lo posible".

125. El Sr. DHAVERNAS (Canadá) observa que el representante de la Unión Soviética ha preguntado por qué hay que cambiar un procedimiento que hasta ahora se ha considerado adecuado. Su delegación hace tiempo que viene creyendo que ese procedimiento es insatisfactorio. Considera que la Comisión es soberana en la materia y puede decidir recomendar la modificación del reglamento. Su delegación no votará en favor de la enmienda soviética ni de la subenmienda propuesta por el representante de México.

126. El Sr. KONATE (Senegal) dice que es práctica normal en otras organizaciones internacionales la elección simultánea de suplentes con los miembros. No ve razón para hacer una excepción a ese principio en el caso de la Subcomisión.

127. El Sr. BARAKAT (Jordania) dice que está clara la preocupación general por encontrar la forma de mejorar el funcionamiento de la Subcomisión. Se han manifestado muchos puntos de vista diferentes respecto del artículo 13.2 del reglamento, pero cabe preguntarse si se han tomado en cuenta todas las condiciones establecidas en ese artículo. Se ha indicado que el suplente sería designado por el propio experto, en consulta con el Secretario General, de lo que se deducía que el suplente sería de cierta categoría.

128. Propone que se siga estudiando el asunto; es aconsejable no tomar una decisión inmediata.

129. El Vizconde COLVILLE de CULROSS (Reino Unido) dice que su delegación aprecia el esfuerzo que vienen haciendo los miembros para llegar a una solución aceptable. Aunque su delegación está dispuesta a seguir considerando el asunto si ésta es la opinión general, desea señalar que se propone simplemente una recomendación al Consejo Económico y Social, que es el organismo que decidirá si acepta el proyecto de resolución E/CN.4/1983/L.34 en su tenor actual o en alguna otra forma. Además, si se difiere el asunto no se presentará ningún proyecto de resolución al Consejo Económico y Social en 1983 ni habrá ningún cambio de procedimiento durante otros tres años a partir de 1984.

130. La referencia al artículo 13.2 del reglamento se ha incluido por razones de seguridad, para asegurarse que la Comisión no hace nada ilegal.

131. El Sr. HEREDIA (Cuba) pregunta si la delegación soviética aceptaría un pequeño cambio en su enmienda del documento E/CN.4/1983/L.67, para que diga: "se exhorta a los miembros de la Subcomisión a que sólo en circunstancias excepcionales designen suplentes que no hayan sido elegidos". El fundamento de esa enmienda consiste en que algunos países carecen de candidatos debidamente calificados, por lo que deben poder nombrar personas capaces de reconocida independencia intelectual, por ejemplo entre los miembros de las misiones.

132. El Sr. SOFINSKY (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la única preocupación de su delegación es conciliar la idea expresada en el proyecto de resolución E/CN.4/1983/L.34 con el reglamento vigente, a fin de llegar a un compromiso. Su delegación está dispuesta a aceptar la propuesta del representante de Cuba.

133. El PRESIDENTE invita a la Comisión a votar sobre la enmienda propuesta por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el documento E/CN.4/1983/L.67, con la modificación introducida por la delegación de Cuba.

134. Por 22 votos contra 12 y 8 abstenciones queda rechazada la enmienda.

135. A petición del representante de Tanzania, se somete a votación por separado el párrafo c) de la parte dispositiva del proyecto de resolución E/CN.4/1983/L.34.

136. Por 23 votos contra 8 y 11 abstenciones queda aprobado el párrafo c) de la parte dispositiva.

137. A petición del representante de Bulgaria, se somete a votación por separado la frase de la parte dispositiva del proyecto de resolución que dice "no obstante lo dispuesto en el artículo 13.2 del reglamento de las comisiones orgánicas del Consejo Económico y Social".

138. Por 25 votos contra 5 y 9 abstenciones queda aprobada la frase.

139. Se procede a votación nominal sobre el proyecto de resolución E/CN.4/1983/L.34 en su conjunto.

140. Efectuado el sorteo por el Presidente, corresponde votar en primer lugar a Rwanda.

<u>Votos a favor:</u>	Alemania, República Federal de, Australia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chipre, Estados Unidos de América, Fiji, Filipinas, Finlandia, Francia, Gambia, Ghana, India, Irlanda, Italia, Japón, Jordania, México, Países Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Unida de Tanzania, Rwanda, Senegal, Togo, Uganda, Uruguay, Yugoslavia, Zaire, Zimbabwe.
-----------------------	---

<u>Votos en contra:</u>	Bulgaria, Cuba, Polonia, República Socialista Soviética de Ucrania, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
-------------------------	---

<u>Abstenciones:</u>	Argentina, Bangladesh, China, Jamahiriya Árabe Libia, Mozambique, Nicaragua, Pakistán.
----------------------	--

141. Por 31 votos contra 5 y 7 abstenciones, queda aprobado el proyecto de resolución E/CN.4/1983/L.34 en su conjunto.

Proyectos de resolución E/CN.4/1983/L.35/Rev.1, L.42 y L.64

142. El Sr. DHAVERNAS (Canadá) dice que tanto el proyecto de resolución E/CN.4/1983/L.35/Rev.1 como el proyecto de resolución E/CN.4/1983/L.42 sobre la misma cuestión, es decir las funciones y el mandato de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, han sido objeto de largas y provechosas discusiones que han conducido a la formulación del proyecto de resolución de compromiso E/CN.4/1983/L.64, que su delegación espera será aprobado por la Comisión. De ser así, su delegación pedirá que se someta a votación el proyecto de resolución E/CN.4/1983/L.35/Rev.1. Solicita que el proyecto de resolución de compromiso, que incorpora la enmienda propuesta por la delegación del Brasil en el documento E/CN.4/1983/L.36, sea considerado en primer lugar por la Comisión.

143. El Sr. GUEVORGIAN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación está de acuerdo con la propuesta de examinar en primer lugar el proyecto de resolución E/CN.4/1983/L.64. En caso de aprobarse este proyecto de resolución, su delegación no insistirá en la votación sobre el proyecto de resolución E/CN.4/1983/L.42.

144. El Sr. CHOWDHURY (Bangladesh), presentando el proyecto de resolución E/CN.4/1983/L.64, rinde homenaje a los patrocinadores de los proyectos de resolución E/CN.4/1983/L.35/Rev.1 y E/CN.4/1983/L.42, cuya flexibilidad ha permitido llegar a ese texto.

145. El proyecto de resolución E/CN.4/1983/L.64 toma nota del informe de la Subcomisión, reconoce la importante contribución de la labor de la Subcomisión y recuerda la resolución 1982/23 de la Comisión, el mandato de la Subcomisión y el objeto de su trabajo. Más adelante exhorta a la Subcomisión a que en el cumplimiento de sus funciones y deberes se guíe por las resoluciones a que se hace referencia en los párrafos del preámbulo, señala a la atención de la Subcomisión las observaciones y sugerencias formuladas durante el presente período de sesiones de la Comisión e invita a la Subcomisión a que considere y formule recomendaciones a la Comisión sobre cuál sería la mejor manera de armonizar su labor con la de la Comisión, dentro del actual mandato de la Subcomisión. Invita además a la Subcomisión a que examine las posibilidades de racionalizar sus métodos de trabajo con el fin de tranquilizar el ánimo de algunos miembros de la Comisión, e insta a asegurarse de que los relatores especiales limiten el texto de sus informes a la extensión fijada. En resumen, se recuerda a la Subcomisión que la base de su labor radica en sus trabajos de erudición.

146. La finalidad del proyecto de resolución es restablecer la comprensión y la coordinación entre la Subcomisión y la Comisión, en interés del progreso de la causa de los derechos humanos. Espera que el proyecto de resolución se aprobará sin votación.

147. El Sr. CALERO RODRIGUES (Brasil) observa que, en su resolución 1982/10, la Subcomisión ha decidido "que el Grupo de Trabajo sobre Detención y Prisión, cuando se reúna en el período de sesiones de la Subcomisión preste especial atención a oír y recibir, de conformidad con las normas y prácticas existentes de la Subcomisión, información sobre hechos relativos a las torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y a la extensión de tales tratos, a menos que la Comisión de Derechos Humanos establezca un sistema para examinar esa información". Se ha señalado durante el debate en la Comisión que esto significa una innovación de gran importancia y que debe examinarse para determinar si está justificada. Esta la razón implícita

en la propuesta hecha por las delegaciones del Brasil y Uruguay en el documento E/CN.4/1983/L.82, en virtud de la cual se pide a la Subcomisión que "aplaze la aplicación de la decisión contenida en el párrafo 17 de su resolución 1982/10 hasta que la Comisión haya examinado la cuestión en su 40º período de sesiones".

148. Como esa propuesta fue hecha después de la presentación del proyecto de resolución E/CN.4/1983/L.64, no ha sido posible incorporarla en él. Además, el proyecto de resolución E/CN.4/1983/L.64 constituye un frágil compromiso, por lo que la introducción de una enmienda podría plantear problemas. En consecuencia, el orador sugiere que la propuesta contenida en el documento E/CN.4/1983/L.82 sea aprobada como decisión separada de la Comisión, que diga:

"La Comisión de Derechos Humanos

Decide pedir a la Subcomisión que aplaze la aplicación de la decisión contenida en el párrafo 17 de su resolución 1982/10 hasta que la Comisión haya examinado la cuestión en su 40º período de sesiones."

149. El PRESIDENTE dice que, en caso de no haber objeción, considerará que la Comisión desea aprobar sin votación el proyecto de resolución E/CN.4/1983/L.64, así como el proyecto de decisión propuesto por la delegación del Brasil.

150. Así queda acordado.

Proyecto de resolución E/CN.4/1983/L.43/Rev.1

151. El Sr. KAMPER (Países Bajos), presentando el proyecto de resolución E/CN.4/1983/L.43/Rev.1 sobre la discriminación contra las poblaciones indígenas, dice que su delegación ya ha manifestado su satisfacción por la rápida aplicación de la resolución 1982/19 de la Comisión pidiendo al Consejo Económico y Social que autorice a la Subcomisión a que establezca anualmente un grupo de trabajo sobre poblaciones indígenas. Su Gobierno aprecia la forma en que ese Grupo de Trabajo ha realizado su primer período de sesiones y confía en que seguirá funcionando como plataforma provechosa de los representantes de las poblaciones indígenas. Con ánimo de alentar al Grupo de Trabajo sobre poblaciones indígenas, su delegación ha presentado el proyecto de resolución en estudio que responde a la petición hecha en la resolución 1982/31 de la Subcomisión en el sentido de que la Comisión y el Consejo Económico y Social establezcan un fondo voluntario con el propósito de permitir a los representantes de las poblaciones indígenas participar en las labores del Grupo de Trabajo. Su delegación espera una propuesta más concreta por parte de la Subcomisión respecto a ese fondo. Espera que la Comisión aprobará el proyecto de resolución sin votación.

152. El PRESIDENTE, después de anunciar que las delegaciones de Colombia y Perú desean adherirse a los patrocinadores del proyecto de resolución E/CN.4/1983/L.43/Rev.1, dice que, de no haber objeciones, considerará que la Comisión desea aprobar ese proyecto de resolución sin votación.

153. Así queda acordado.

Proyectos de resolución recomendados por la Subcomisión para su aprobación (E/CN.4/1983/4)

Proyecto de resolución I

154. El Sr. BOZOVIC (Yugoslavia), refiriéndose a la exposición de las consecuencias financieras que implica la actualización del estudio sobre el genocidio (E/CN.4/1983/L.57), observa que se necesitarán los servicios de un auxiliar temporal del

Relator Especial durante seis meses a nivel P-3, con un costo de 24.000 dólares. Pregunta si esto significa que habrá que contratar un nuevo auxiliar para la preparación del estudio y, en caso de ser así, si esto es práctica general en los estudios especiales. La Comisión debe reflexionar antes de decidir emprender estudios que requieran contratar personal suplementario con un costo apreciable.

155. El Sr. NYAMEKEYE (Director Adjunto, Centro de Derechos Humanos), dice que la Secretaría entiende que el Relator Especial revisará y actualizará el estudio y que al hacerlo tomará en cuenta todos los nuevos hechos relacionados con la cuestión desde que se llevó a cabo el estudio.

156. Con referencia a las consecuencias financieras, la Secretaría considera que el Relator Especial necesitará asistencia temporal adecuada.

157. El Sr. BOZOVIC (Yugoslavia), apoyado por el Sr. SCHIFTER (Estados Unidos de América), dice que en el futuro Centro de Derechos Humanos debe prestar una atención más cuidadosa a las consecuencias financieras de los estudios propuestos antes de que el asunto pase a decisión.

158. El Sr. CHOWDHURY (Bangladesh), apoyado por el Sr. BASHIR (Pakistán), dice que en su opinión el estudio del genocidio debe actualizarse a partir de la fecha de la publicación de la versión actual.

159. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones, considerará que la Comisión desea aprobar sin votación el proyecto de resolución I.

160. Así queda acordado.

Proyecto de resolución III

161. La Sra. PURI (India) pregunta si el Informe sobre la Esclavitud de 1966 del que el informe del Sr. Whitaker es una versión actualizada, también ha sido impreso y ha sido objeto de la distribución más amplia posible. En caso negativo, el segundo documento, que sólo complementa el informe anterior, no daría un panorama completo.

162. El Sr. NYAMEKEYE (Director Adjunto, Centro de Derechos Humanos) dice que, naturalmente, se ha impreso y distribuido el informe anterior.

163. El Sr. MA (China) pregunta por qué no se hace mención del idioma chino en la exposición de las consecuencias presupuestarias contenidas en el documento E/CN.4/1983/L.47.

164. El Sr. NYAMEKEYE (Director Adjunto, Centro de Derechos Humanos) dice que en algunos casos sólo se utiliza cierto número de idiomas, pero que el asunto está sujeto a confirmación de la instancia pertinente.

165. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones, considerará que la Comisión desea aprobar sin votación el proyecto de resolución III.

166. Así queda acordado.

Proyecto de resolución VI

167. El Sr. DHAVERNAS (Canadá) dice que las consultas entre su delegación y otras han mostrado que muchos miembros de la Comisión simpatizan con el proyecto de resolución VI. Sin embargo, resulta ambiguo e impreciso. Por ejemplo, no queda claro quién tomará la iniciativa en relación con las visitas propuestas: si la Comisión pedirá a la Subcomisión que las realice o si la propia Subcomisión hará la petición. Además, el proyecto de resolución no dispone que la Subcomisión informe a la Comisión. También resulta discutible cómo se pueden conciliar estas visitas en la práctica con la necesidad de informar a la Comisión de una forma general y no discriminatoria sobre las violaciones en todas las regiones del mundo, ya que es inevitable prestar atención preferencial a algunos países.

168. El orador propone que el párrafo de la parte dispositiva diga: "Decide transmitir a la Subcomisión el proyecto de resolución VI propuesto por la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías en su resolución 1982/14, para que en su 36º período de sesiones lo examine más a fondo y trate de darle una nueva formulación".

169. El Sr. BOZOVIC (Yugoslavia), secundado por la Sra. PURI (India) y el Sr. HEREDIA (Cuba), dice que el proyecto de resolución le plantea dificultades similares. La aprobación de la enmienda presentada por la delegación del Canadá podría ser interpretada como una especie de aceptación, un aliento tácito a la Subcomisión para que prosiga como ha comenzado. No se dispone de tiempo suficiente para examinar todas las consecuencias del proyecto de resolución, por lo que propone que se aplaze una decisión sobre el asunto hasta una fecha posterior.

170. Queda aprobada la propuesta sin objeciones.

Proyecto de resolución X

171. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones, considerará que la Comisión desea aprobar sin votación el proyecto de resolución X.

172. Así queda acordado.

Se levanta la sesión a medianoche.